

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### RAMA JUDICIAL

### TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, seis (6) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario instaurado por JULIO CÉSAR CARMONA CASTRO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES- y la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA (**Radicado 05001-31-05-005-2019-00540-01**).

Se RECONOCE PERSONERIA para actuar a favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, a la sociedad CAL & NAF ABOGADOS S.A.S, conforme al poder que le fue conferido.

De igual manera, se RECONOCE PERSONERIA para actuar en favor de la misma entidad al abogado Mauricio Lara García, con tarjeta profesional No. 273.006 del C.S. de la J., conforme a la sustitución obrante en el plenario.

## ANTECEDENTES

El demandante pretende por vía judicial la nulidad del dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, para que en su lugar se declare que su pérdida de capacidad laboral se estructuró el 29 de agosto de 2016 y se ordene el reconocimiento y pago del retroactivo pensional por invalidez desde esa data, junto con los intereses moratorios y las costas del proceso.

Como sustento de lo anterior, comentó que como afiliado a Colpensiones fue calificada con su PCL en un 38.65% con fecha de estructuración del 24 de junio de 2017. Fue calificado nuevamente por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia con una PCL del 58.03% estructurada el 16 de marzo de 2017. Ya nuevamente se practicó una experticia por la IPS Universitaria de la Universidad de Antioquia, estableciendo como fecha de estructuración el 29 de agosto de 2016. El 08 de octubre de 2019 efectuó reclamación del retroactivo pensional ante Colpensiones sin obtener respuesta de lo pedido.

COLPENSIONES, se pronunció en término con oposición a lo pedido por aducir el acogimiento a la pericia de la Junta, la que se constituye en la autoridad permitida por el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, de donde surge acertado el reconocimiento desplegado. Formuló como excepciones de fondo las que denominó inexistencia de deber de declarar nulo el dictamen de pérdida de capacidad laboral, inexistencia de la obligación de reconocer retroactivo pensional, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, improcedencia de la indexación, compensación, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas y descuentos del retroactivo por salud.

La JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA por su parte, adujo estar su experticia ceñida al estudio de la

historia clínica y la evaluación realizada, resultando ser plenamente eficaz, sobre la que no se interpusieron los recursos de ley para ser escalado a la Junta Nacional de Calificación. Como excepciones de mérito propuso las de dictamen de la junta regional de calificación de invalidez es plenamente válido, la determinación de la pérdida de capacidad laboral y la fecha de estructuración están ajustadas a derecho, específicamente al manual único de calificación de invalidez, inexistencia de obligaciones de reconocimiento y pago de pensiones de invalidez, buena fe por parte de la junta regional de calificación de invalidez de Antioquia y de ello se deriva la imposibilidad de condena en costas, inexistencia de fundamentos técnicos y jurídicos para demandar - Ausencia de causa para pedir y el estado clínico del paciente pudo variar después de que la Junta Regional emitió el dictamen de calificación y ello la exime de responsabilidad.

Surtido el trámite de rigor, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín mediante providencia que emitió el 25 de octubre de 2022, DECLARÓ probadas las excepciones de inexistencia del deber de declarar nulo el dictamen de PCL, y el dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez es plenamente válido. ABSOLVIÓ a las demandadas de las pretensiones elevadas en su contra. CONDENÓ en costas al demandante, fijando las agencias en derecho en la suma de \$1.000.000.

La Sala en el marco de lo que regula el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, conoce del asunto por el grado de consulta en favor del demandante por resultarle desfavorable la sentencia, sin que haya sido atacada por el recurso vertical.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

## CONSIDERACIONES

La Corporación restringirá su estudio al tenor de las directrices procesales que dictan las normas que regulan el asunto, y que en síntesis apuntan a determinar si se da por acreditado que el demandante tiene derecho a la pensión de invalidez desde momento previo a su otorgamiento en el sendero de la experticia arribada al plenario.

Para ese fin, se tiene que al tenor de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, el estado de invalidez debe establecerse mediante la valoración científica que efectúan entre otras, las Administradoras de Riesgos Laborales -ARL; las Compañías de Seguros que asumen el riesgo de invalidez y muerte y las EPS, con base en el Manual Único para la Calificación de Invalidez expedido por el Gobierno Nacional; calificaciones a partir de las cuales son valoradas las deficiencias del paciente, determinando el grado de la pérdida de capacidad laboral, así como la data desde la que la persona perdió en un grado o porcentaje su capacidad productiva u ocupacional, de lo que se entiende que la invalidez se estructura cuando la persona pierde en forma permanente y definitiva la capacidad laboral como consecuencia de una enfermedad o accidente.

A partir de lo previo, en el proceso de establecer la situación de invalidez de una persona afiliada al Sistema General de Pensiones, la fecha de estructuración es el concepto determinante, pues indica a ciencia cierta el momento en que aquella configuró ese estado valetudinario que la convierte en sujeto de la garantía previsional denotando la fecha del status de invalidez; y se constituye en el punto de partida para contabilizar las semanas impuestas en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 a fin de obtener la pensión de invalidez, momento que no siempre coincide con la ocurrencia de la enfermedad, pues las secuelas se pueden manifestar con posterioridad, por lo tanto es esta última circunstancia la que determina la norma reguladora del asunto (Ver SL1222-2023).

En esa línea, la pensión de invalidez debe pagarse en forma retroactiva desde la fecha de estructuración de la misma, sin que explícita ni tácitamente se estableciera condición diferente al estado de pérdida de capacidad laboral para proceder al reconocimiento pensional desde su consolidación, a menos que existan subsidios por incapacidad temporal, continuos o discontinuos, con posterioridad a la fecha de estructuración del estado de invalidez, donde las mesadas pensionales se comienzan a pagar sólo a partir del momento en que expire el derecho a la última incapacidad (Ver SL3447-2022).

Ahora, la H. Corte Suprema de Justicia ha establecido que los dictámenes que profieran las entidades autorizadas pueden controvertirse ante los jueces del trabajo, quienes tienen competencia para examinar los hechos que contextualizan la condición incapacitante establecida por aquellas, contando el Juez con amplias potestades probatorias y de reconstrucción de la verdad real del proceso, de manera tal que puede darle credibilidad plena al dictamen o someterlo a un examen crítico integral o de alguno de sus elementos, hasta el punto de apartarse legítimamente de sus valoraciones y conclusiones pues la Corporación ha sostenido que esos dictámenes, a pesar de su importancia, no representan conceptos intocables y únicos, sino pruebas del proceso que bien pueden ser revaluadas o desvirtuadas por el juez del trabajo, en ejercicio de sus libertades de valoración probatoria, por manera que no tienen la virtud de resolver de manera definitiva las controversias ni de producir efectos de cosa juzgada (SL5280-2018, SL2349-2021, SL2627-2022, SL745-2023).

Así las cosas, las partes pueden discutir el contenido de los dictámenes que se emiten ante la jurisdicción ordinaria laboral, aportando un nuevo dictamen u ordenándose por el Juez la realización de otro, por lo que en ese contexto, tal dictamen no tiene que ser necesariamente emitido por las EPS, AFP, ARL, Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez, sino que puede serlo por otro ente especializado en el asunto

objeto de valoración; y ya contándose con diferentes conceptos científicos sobre el estado de salud de una persona, los falladores pueden soportar su decisión en el que les ofrezca mayor credibilidad y poder de convicción en relación con los demás elementos de prueba (SL4346-2020), pero de cualquier modo, para controvertir el concepto experto que los calificadores emiten sobre la invalidez, se requiere de un criterio técnico-científico, suficiente que desvirtúe de manera idónea el dictamen controvertido, como requisito para dejar sin efectos el emitido por quien funge como autoridad técnica en materia de calificación dentro del diseño institucional del sistema integral de seguridad social (Ver SL1578-2022).

Esa valoración que realiza el operador judicial, debe partir de las reglas de la sana crítica (experiencia, lógica y ciencia, art. 232 del CGP), sin pasar por alto el contenido del artículo 226 del mismo compendio procesal, aplicable por remisión analógica que permite el 145 del CPT y la SS., que impone criterios objetivos para otorgar mayor credibilidad a una u otra prueba de este tipo. Específicamente, el inciso 5° de esa disposición, refiere que el diagnóstico debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado. Además, para que el dictamen adosado por la parte sea eficaz probatoriamente, debe cumplir con los requisitos formales.

En efecto, la activa se aleja del concepto brindado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia en lo que tiene que ver con la fecha de estructuración, y arrima un nuevo dictamen que profirió el médico especialista en salud ocupacional José William Vargas Arenas adscrito para la fecha de su emisión -22 de agosto de 2019- a la IPS Universitaria donde comparte el porcentaje otorgado, pero estipula como fecha de estructuración el 29 de agosto de 2016, para cuando según la conclusión plasmada en la pericia, ya el paciente presentaba patología vascular de pared abdominal y renal en magnitudes que le confieren una pérdida de capacidad laboral del 50% (Págs. 75-81 Archivo 01).

En igual sentido, al ser sustentado su dictamen en audiencia, el calificador reveló que para la fecha determinada en su valoración el demandante contaba con tres patologías - vascular, hernia e insuficiencia renal-, suficientes para definir una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, fecha para la cual ya se hallaban consolidadas, y estaba determinada su mejoría máxima.

Atendiendo este concepto de cara al emitido por la Junta de Calificación, encuentra esta colegiatura que asiste razón al fallador de instancia cuando le otorga mayor credibilidad al dictamen atacado y permite el convencimiento de conservar la fecha del 16 de marzo de 2017 como la de estructuración de la invalidez del señor Carmona Castro.

Y es que acudiendo al historial clínico no se halla una referencia particular que dé lugar a la modificación del momento en que se define el alcance del grado de invalidez, resultando ser los argumentos del experto insuficientes para demeritar el valor de una experticia que si basa su designación en un registro médico por nefrología, donde surge el diagnóstico de *“insuficiencia renal con depuración de creatinina disminuida”*, de cara a una fecha en la que el calificador particular considera bajo parámetros casi propios que alcanzó una condición de invalidez, sin mencionar la prueba objetiva que sustenta su dicho derivado de los estudios clínicos o paraclínicos, exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, con evocación de los fundamentos técnicos y científicos.

Es que la fecha de estructuración de invalidez debe comprobarse en términos materiales y no solamente formales, por lo que el perito debió hacer evidente bajo argumentos idóneos y soportados documentalmente, la fecha en que el afiliado vio disminuidas sus destrezas físicas o mentales, en tal grado, que le impide desde tal data y en el marco del concepto del Manual único de Calificación, la ejecución de cualquier

actividad económicamente productiva, de donde no se halla razonabilidad ni mérito a que haya sido el 29 de agosto de 2016 para cuando se alcanzó la condición de invalidez. Aun cuando se pregona que para esa época ya había sido sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas y contaba con una insuficiencia renal crónica sin reversa; ese registro como diagnóstico solo se evidencia del concepto emitido por nefrología para marzo de 2017 con estenosis severa y deterioro de creatinina, por lo que no se da entendimiento palmario del evento, hallazgo o evolución de las secuelas que permita acudir bajo una convicción plena que el paciente pese a padecer las afectaciones calificadas desde más de una década atrás, sea para agosto de 2016 para cuando se entienden consolidadas las enfermedades y surja una circunstancia que promueva la pérdida de capacidad laboral del paciente en un 50%, evidenciando del historial clínico aportado (Págs. 113-337 Archivo 01) que el advenimiento progresivo de la úlcera varicosa derecha estaba en manejo y en fase de curación todavía para febrero de 2017 (Pág. 123 Archivo 01), sin que por demás resulte coincidente la manifestación del perito respecto de la mejoría médica máxima del señor Carmona, pues no se hace posible hablar para ese momento definido por el calificador particular de una estabilización sustancial de las patologías ya sea en el marco de una mejora o de un empeoramiento, ya que se encontraba a espera de una cirugía vascular, y una intervención de herniorrafia con malla realizada solo hasta el 06 de noviembre de 2016 (Págs. 113-114 Archivo 01), con evidencia de crecimiento prostático obstructivo a partir de un procedimiento desplegado solo hasta el 12 de febrero de 2017 (Págs. 139-142 Archivo 01).

Así, la pericia incluida en el escrito de demanda no cumple la exigencia de exhaustiva y detallada para darse modificación a la fecha de estructuración de la invalidez ya admitida en sede administrativa (Págs. 41-47 Archivo 01), pues de ella no emergen las motivaciones minuciosas que ilustren con convicción la razón que asiste a la evaluación que se

desea hacer valer en el trámite, en tanto no se ofrecen conclusiones sólidas que dejen sin duda la opinión profesional y que resulten ser de forma manifiesta concordante con los registros clínicos con los que se cuenta en contraposición a las pericias cuestionadas, sin que sea atinado permitir la disputa de una pericia desde el concepto único del médico calificador sin apoyo específico del medio clínico o la historia natural de las enfermedades, lo que imposibilita en el juez formar un criterio ausente de certeza desde perspectivas técnicas, significando lo anterior que no se configuran los elementos propios para la validez del medio probatorio del que la activa se vale y que debió ser bajo el sometimiento riguroso de los criterios que el legislador ha previsto para ello, pues de lo contrario, se atenta no solo contra el propósito mismo del medio de prueba, sino también con el derecho de contradicción que puede ejercer la contraparte.

Lo anterior deja claro que ante los conceptos científicos que obran en el expediente, el dictamen emitido de manera particular no merece credibilidad y poder de convicción a esta Sala Laboral dentro del marco de la libertad probatoria, por no ser emitido a partir de la rigurosidad exigida, ni ser el que se acompasa de manera más razonable a la verdad médica del demandante, lo que conlleva a que la providencia revisada sea confirmada, en tanto no hay lugar a dar variación a la fecha desde la cual debe darse el disfrute de la prestación por invalidez concedida al actor desde el 16 de marzo de 2017 (Págs. 41-47 Archivo 01).


Por razón del grado de Consulta, en esta instancia no se causaron costas.

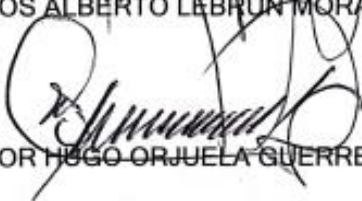
### DECISIÓN:


En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia objeto de consulta de fecha y procedencia conocidas. Sin costas.

Notifíquese la presente decisión por EDICTO (numeral 3° del literal d, del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y AL2550-2021, CSJ)

Los Magistrados,

  
CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

  
VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

  
SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA  
EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

**Radicación:** 05001310500520190054001  
**Proceso:** ORDINARIO LABORAL  
**Demandante:** JULIO CESAR CARMONA CASTRO  
**Demandado:** COLPENSIONES  
**M. P.** CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES  
**Fecha de fallo:** 6/09/2023  
**Decisión:** CONFIRMA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibídem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 7/09/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario